

La desigualdad como ventaja comparativa: fronteras, asimetrías territoriales y extractivismo agrícola. Apuntes desde el caso de Honduras. (número temático “Extractivismos en fronteras”)

Delphine Prunier, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM

Resumen: El artículo busca cuestionar las raíces profundas de la situación socioeconómica y del fenómeno actual de expulsión migratoria en Honduras. Convoca una perspectiva histórica sobre la construcción del territorio, las huellas de economías agrícolas orientadas hacia el exterior y la cimentación de desequilibrios socioespaciales en la región. Se trata de evidenciar que los sistemas productivos globales extractivos y el capitalismo en su fase contemporánea de globalización se basan en procesos de diferenciación, contraste y heterogeneidad en los que se saben apoyar. Se observan en particular las dinámicas de avance de la frontera agrícola, la expansión del cultivo de palma africana en el litoral norte y las lógicas de dominación y organización social de las cadenas productivas. La contribución se dedica a explorar varias acepciones de la noción de frontera, insistiendo en sus incidencias en términos de procesos de territorialización, así como en su dimensión sociocultural, desde el enfoque de la discontinuidad, las relaciones de poder y las asimetrías territoriales en distintas escalas.

Palabras claves: extractivismo agrícola, palma africana, fronteras internas, fronteras sociales, Honduras

Résumé : L'article cherche à questionner les racines profondes de la situation socio-économique et le phénomène actuel d'expulsion migratoire au Honduras. Il appelle à une perspective historique sur la construction du territoire, les traces d'économies agricoles tournées vers l'extérieur et le fondement des déséquilibres socio-spatieux dans la région. Il s'agit de démontrer que les systèmes productifs extractivistes mondiaux et le capitalisme dans sa phase contemporaine de mondialisation reposent sur des processus de différenciation, de contraste et d'hétérogénéité sur lesquels ils savent s'appuyer. On observe en particulier la dynamique de l'avancée de la frontière agricole, l'expansion de la culture de la palme africaine dans le litoral nord, ainsi que les logiques de domination et d'organisation sociale des chaînes productives. La contribution est consacrée à l'exploration des différentes acceptations de la notion de frontière, en insistant sur ses incidences en termes de processus de territorialisation et sur sa dimension socioculturelle, sous l'angle de la discontinuité, des relations de pouvoir et des asymétries territoriales à différentes échelles.

Mots clés: extractivisme agricole, palme africaine, frontières intérieures, frontières sociales, Honduras

Abstract : This article seeks to question the deep roots of the socioeconomic situation and the current phenomenon of migratory expulsion in Honduras. It calls for a historical perspective on the construction of territory, traces of outward-oriented agricultural economies, and the foundations of territorial and social imbalances in the region. It demonstrates that the global extractive productive systems and capitalism, in its contemporary phase of globalization, are based on processes of differentiation, contrast and heterogeneity on which they support themselves. In particular, dynamics of the encroaching agricultural frontier, the expansion of the cultivation of African palms on the northern coast, and the logic of domination and the social organization of the chains of production are observed. This contribution is dedicated to exploring various acceptances of the notion of the frontier, declaring its incidence in terms of territorialization processes, as well as its sociocultural dimension, from the point of view of discontinuity, power relations and territorial asymmetries at different scales.

Keywords: agricultural extractivism, African palm, internal frontiers, social frontiers, Honduras

A finales del 2018, las llamadas “caravanas de migrantes” centroamericanos han sido muy mediatizadas, poniendo a la luz a Honduras como país de alta expulsión migratoria. México se presentó entonces como “la” frontera por cruzar en el camino hacia el Norte, para una población qui huía de una región en donde reina la violencia y la pobreza. Esta contribución busca cuestionar las raíces profundas de esta situación socioeconómica, convocando una perspectiva histórica sobre la construcción del territorio y en particular sobre las huellas de economías agrícolas orientadas hacia el exterior. Nos enfocamos en el caso de Honduras, país en donde la explotación extractivista de los recursos es estructurante, cuya sociedad se caracteriza por un carácter profundamente rural y que recibe paralelamente las mayores inversiones extranjeras de la región. Con este objetivo, el artículo se dedica a explorar varias acepciones de la noción de frontera, para centrar la mirada en la complejidad y profundidad histórica de la cimentación de desequilibrios territoriales y sociales en la región. Consideramos por lo tanto necesario proporcionar elementos de comprensión del contexto migratorio actual, en un país poco estudiado, a través del lente de las lógicas extractivistas relacionadas con las dependencias y fracturas inherentes al sistema agroindustrial global.

El capitalismo en su fase actual de globalización provoca desigualdades sociales, económicas y territoriales, al generar lógicas de producción y de explotación de los recursos altamente segmentadas, así como procesos de vulnerabilidad y exclusión hacia ciertos grupos de población. Numerosos trabajos han demostrado los impactos de la mundialización en términos de fragmentación y asimetrías. Queremos aquí resaltar una mirada distinta -aunque no contradictoria-, al reflexionar acerca del papel de las desigualdades territoriales en la instalación y el progreso de los sistemas productivos globales extractivos. Se trata de evidenciar que el capital no se basa en la homogeneización sino más bien en procesos de diferenciación, contraste y heterogeneidad en los que se sabe apoyar. Nos enfocamos en las dinámicas de extractivismo agrícola en Honduras para presentar la importancia clave del aprovechamiento de los diferenciales territoriales y de las distintas formas de frontera en el desarrollo histórico de la agroexportación.

El extractivismo se define como un modo de acumulación relacionado con el capitalismo y con la conquista colonial. Está íntimamente vinculado con la demanda de centros y metrópolis dedicados a productos manufacturados y por lo tanto dependientes de la explotación de regiones periféricas en donde se extrae el recurso primario disponible en gran cantidad, de acuerdo con la lógica de las ventajas comparativas y de la división internacional del trabajo en contexto de polarización y circulación de los capitales. A lo largo de la expansión capitalista, se vincula también con dispositivos de dominación en los que la pobreza y el subdesarrollo en el Sur resultan esenciales para la prosperidad

y el crecimiento del Norte. La definición del extractivismo incluye procesos de extracción de grandes cantidades de recursos naturales poco o nada procesados, destinados a la exportación. Estos se consideran como no sustentables porque se tratan de recursos finitos (petróleo, minerales, bosques, tierras agrícolas) cuya explotación implica daños ambientales, así como pocos beneficios para el desarrollo local y la sociedad (Acosta 2013; Gudynas 2009; 2010). Finalmente, para el caso del extractivismo agrícola que nos ocupa aquí, se trata de monocultivos producidos en espacios de enclave, articulados con las lógicas de intercambio de la economía globalizada. Se caracterizan por un lado por estatutos jurídicos o fiscales ventajosos en términos de competitividad mundial y, por el otro lado, por actividades reticulares que son estructuradas y orientadas desde y hacia el exterior, fuertemente dependientes de las inversiones y de los mercados extranjeros, y caracterizadas por un modelo de producción muy desigual en la relación de fuerza entre trabajo y capital (Morales et al. 2012; Lara Flores et al. 2014). Estos territorios de enclave agrícola fragmentan el espacio físico y social; “se manifiesta una fuerte tensión entre lo concreto (el lugar) y lo global (los flujos), entre la acumulación y el despojo [...]” (Gadea et al. 2014: 146). La problemática del extractivismo agrícola no se puede desvincular de la discusión sobre el papel de los monocultivos en la concentración de la tierra, los conflictos sociales, el despojo y el rol de los actores tanto nacionales como transnacionales (ver Borras, Kay, et al. 2012; Borras, Franco, et al. 2012, sobre la especificidad de las dinámicas latinoamericanas y las diversas formas de *landgrabbing*).

Al analizar las lógicas extractivistas que han construido históricamente el territorio y la sociedad rural en Honduras, pretendemos entender fenómenos de violencia, exclusión y migración desde un ángulo original. Se trata en efecto de encontrar respuestas a las problemáticas agudas de pobreza y marginalización en esta región, mostrando la cara menos visible de los desequilibrios, de las injusticias sociales y de las relaciones de poder que han llevado el país a una situación de violencia estructural, en donde se entremezclan explotación de los recursos naturales y humanos, opresión en los enclaves transnacionales y reproducción de la violencia (Galtung 1969; Bourgois 1988; Bourgois y Hewlett 2012; Devia Garzon et al. 2016; Pine 2008). Desde el punto de vista de los estudios migratorios, uno de los objetivos centrales de la contribución es aportar una lectura descentrada de las recientes dinámicas migratorias hacia el Norte, enfocándose menos al flujo en sí mismo, que a la construcción de un terreno fértil para tal expulsión migratoria. Se trata de fomentar una mejor comprensión de problemas sociales que tienen raíces profundas en el tiempo, particularmente en la mutación de los espacios rurales, y que, desde nuestra perspectiva, se tienen que entender a partir de una aceptación más amplia y compleja de las múltiples capas de fronteras que atraviesan las sociedades marginalizadas, tanto social como

territorialmente. El caso de Honduras, donde el 71.7% de la población rural se encuentra en situación de pobreza según la CEPAL en 2018¹, se muestra particularmente impactante en este sentido: mientras forma parte del grupo de países que encabezan la lista de expulsores de personas que buscan refugio en México y los Estados Unidos desde la mitad de los años 2010, observamos que los estudios sobre acaparamiento, concentración de tierras y desigualdad en América latina (FAO 2012 o Oxfam 2016 por ejemplo) eluden el caso hondureño.

El artículo se basa en una revisión de la literatura sobre dinámicas agrarias y producción del espacio (Lefebvre 1974) por las relaciones de poder en el cultivo de palma africana en Honduras, con puntos comparativos en distintas regiones de América Latina y del mundo. Se construye sobre todo como una reflexión teórica sobre la multiplicidad de los tipos de fronteras en las que se apoya el extractivismo: por un lado, la frontera interna (avance de la frontera agrícola) y, por el otro, la frontera social (organización social de la producción en el monocultivo de palma). Nos apoyamos en una concepción de la frontera que insiste en su dimensión sociocultural así como en sus incidencias en términos de procesos de territorialización (*frontier* en inglés, más que *border* que traduce líneas de división estatales), desde el enfoque de la discontinuidad que supone estructuras de organización del espacio, relaciones de dominación y asimetrías territoriales.

I. Frontera agrícola y márgenes territoriales en Honduras

A pesar de poseer relativamente pocos recursos estratégicos y de representar una proporción mínima de las inversiones directas de los Estados Unidos en América latina, “América central constituye parte de su frontera estratégica” (Gitli 1989, 105) y ha sido históricamente velada desde la lógica del dominio y de los intereses de seguridad nacional norteamericanos, vía la intervención militar y la explotación de recursos naturales o agrícolas.

La formación de los sistemas agrarios y políticos en Centroamérica está estrechamente ligada a las dinámicas del comercio internacional. Los cultivos de café y de banano han estructurado profundamente el ordenamiento territorial de la región, así como las relaciones de poder, a través del control de dos recursos fundamentales: la tierra y la fuerza de trabajo (Demyk 2007; Pérez Brignoli y Samper 1994; Chonchol 1994; Soluri 2009). Euraque (1996) muestra que las empresas transnacionales jugaron un rol significativo en el destino político de Honduras, pero demuestra sobre todo las articulaciones entre la formación del Estado a lo largo del siglo 20, las dinámicas de la sociedad civil a

1 https://cepalstat-prod.cepal.org/cepalstat/Perfil_Nacional_Social.html?pais=HND&idioma=spanish

escala local y la política nacional. Al enfocarse la región del litoral caribeño de Honduras, es decir a un margen territorial con respecto al poder central de la capital Tegucigalpa, insiste también en la importancia de las “regiones no-centrales” (Roseberry 1993), como ángulos de observación necesarios para entender las transformaciones del Estado en la larga duración. Esta perspectiva de largo alcance es importante para proponer una lectura del papel de las fronteras internas de Honduras, enfocada en la evolución de los espacios y de las políticas públicas rurales. Subrayamos aquí el papel del avance de la frontera en la emergencia de nuevos sistemas espaciales que provocan rupturas territoriales y la reorganización del espacio regional desde los márgenes.

> Reforma agraria hacia el avance de la frontera agrícola

Desde el primer cuarto del siglo 20, la colonización rural en Honduras se dio de manera intensa en la región norte, con la intensificación de la producción de banano y nuevas lógicas de inserción territorial vía las instalaciones férreas y portuarias, dirigidas tanto por los intereses económicos de las empresas norteamericanas como por políticas nacionales de manejo de las franjas territoriales del país. Se organizó el desplazamiento de poblaciones mestizas del centro del país para instalar pequeños productores integrados al sector bananero y para proveer mano de obra en la construcción de infraestructuras, lo que llevó a importantes tensiones y movimientos sociales relacionados con las problemáticas agrarias y laborales. El pueblo Garífuna, primera población negra no-migrante cuya fuerza de trabajo era históricamente clave para el sector bananero, se vio particularmente afectada por estos conflictos (Jung 2011). Se trataba de ocupar tierras “improductivas” para impulsar nuevos ingresos de las concesiones, propicios para la economía de exportación y de enclave (Edelman y León Araya 2014, 203).

A mitad del siglo XX, las plantaciones bananeras de las compañías United y Standard Fruit abandonaron gran parte de las tierras bananeras, a raíz de la huelga del 1954 y de fuertes inundaciones. Como resultado, al iniciar la década de los 1960, la tensión agraria se encontraba muy fuerte, con numerosos trabajadores reclamando un mejor acceso a las tierras y protección de la tenencia (Edelman y León Araya 2014, 208). Apoyado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y en la línea del Plan Alianza para el Desarrollo, el gobierno de Ramón Villeda Morales -muy apreciado de la administración norteamericana por su combate arduo contra el comunismo- creó el INA (Instituto Nacional Agrario), con el objetivo principal de fortalecer el sector empresarial campesino, a través de la creación de cooperativas de producción que recibieran apoyos estatales en insumos,

créditos e infraestructuras para los cultivos de banano, cítricos y palma africana destinados a ser vendidos a las empresas extranjeras o a las nuevas plantas procesadores de capital nacional. Enseguida, se decretó una Reforma Agraria en 1962 basada en la distribución de tierras ejidales y estatales y a la colonización de la frontera agrícola por parte de los campesinos sin tierra. El Valle del Aguán, en particular se convirtió en un espacio clave de esta política de ordenamiento territorial, ya que concentró gran parte de las tierras del “sector reformado”. Lejos de pretender desafiar las grandes corporaciones agroexportadoras o cuestionar la legitimidad de las inmensas extensiones en manos de empresarios extranjeros (Kerssen 2013; León Araya 2019, 135), el proyecto de reforma provocó sin embargo mucha resistencia dentro de la oligarquía terrateniente nacional y transnacional quien presionó al presidente Morales para que retirara la posibilidad de expropiar la propiedad privada (Edelman y León Araya 2014, 209). El año siguiente, los militares retiraron su lealtad al presidente Morales y, en 1963, sufrió un golpe de Estado. El Coronel Oswaldo López Arellano estuvo a cargo hasta 1975, un periodo en el que se confirmó la estrecha articulación entre intereses económicos, poder militar y la cuestión agraria en Honduras.

En 1964, la Organización de los Estados Americanos, el Banco de Desarrollo Interamericano así como el gobierno de Honduras, presentaron el Proyecto Bajo Aguán en el marco de la llamada Mission 105. Aunque la concretización en el terreno y los financiamientos correspondientes no se hicieron ver sino hasta finales de los 1970's, el proyecto mostraba objetivos ambiciosos para el desarrollo de una región estratégica geopolíticamente, considerada como “vacía” y muy rica en términos de recursos naturales (León Araya 2019). La frontera agrícola está concebida como un espacio no o sub-explotado que hay que colonizar (con brazos y capital), para cumplir con un doble propósito: hacer entrar a millones de familias pobres en el camino del desarrollo e incrementar la productividad y la generación de valor agregado para los mercados, en particular en el sector agrícola de exportación, ventaja comparativa por excelencia de la región.

En 1972, el Congreso aprobó el decreto 8 de la Reforma Agraria y se aceleró el ritmo de la distribución de tierras, favoreciendo la creación de empresas campesinas y respondiendo así a las demandas de sectores campesinos y extrabajadores de las bananeras. Se estableció un límite en las extensiones y se previó la expropiación de tierras ociosas, aunque en la realidad, pocas empresas grandes fueron afectadas y la lógica del avance de la frontera agrícola continuó siendo la más importante, especialmente en la región del litoral Norte. La Reforma Agraria hondureña benefició al 22% de los sin tierra y fue entonces la más importante de la región (Edelman y León Araya 2014; Ruhl 1984). Subrayó la frontera clara entre dos zonas del país: dentro del sector reformado, se distingue, por un lado, los

proyectos del Sector de Desarrollo Rural Concentrado, fundamentalmente dedicados a la agricultura intensiva de exportación; por otro lado, el Sector de Consolidación que reagrupa la mayoría del sector campesino marginalizado orientado hacia la producción de granos básicos (Baumeister 1989, 67). La región de la Costa Norte de Honduras, como zona de frontera -en este caso agrícola- se transformó en el blanco de inversiones multitudinarias por parte de los organismos internacionales y del propio gobierno. Con la cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo y de préstamos bilaterales, se construyeron importantes infraestructuras de transporte (carretera y puerto) y plantas procesadoras de palma. De Fontenay (2004, 225) estima que alrededor de 200 millones de dólares fueron invertidos en el 1975, solamente en el Valle del Aguan, lo que representa el 40% de la deuda externa hondureña para el entonces. La implementación de reformas agrarias se vinculó con la ocupación del frente pionero y el desplazamiento de poblaciones necesarias para valorar el territorio, trabajar tierras difíciles y proveer mercancías para los mercados. Sin embargo, el proyecto político y territorial claramente no privilegiaba el control de los medios de producción ni tampoco una relación de poder favorable para el sector campesino, sino más bien una continuidad de concentración de los recursos y poderes en manos de la oligarquía nacional y de las empresas transnacionales (Kerssen 2013, 20).

En la década de los 1970's, se notó un aumento de la importancia de los pequeños y medianos productores bananeros, muchas veces agrupados en cooperativas, así como una baja de las superficies plantadas en banano, en gran parte debida a los huracanes de 1974 (Fifi) y 1982 (Aletta). Según J. Chonchol (1994, 241), el 31% de las 22 000 hectáreas plantadas en 1971 pertenecían a productores asociados, mientras este porcentaje pasó al 44.6 de las 18 420 hectáreas plantadas en el 1984, en su gran mayoría ubicadas en el litoral Atlántico. Con la propiedad asociativa, se promovió un desarrollo basado en la economía de plantación, con una concentración de las reformas agrarias en formas de propiedad colectiva en grandes unidades, en rubros de exportación y en clases sociales de trabajadores asalariados, por lo que se considera que tuvieron un impacto social relativamente débil en el medio rural ya que una limitada porción de la población se encontró incorporada (Baumeister 2001). La implementación de las reformas de 1972 contribuyó sobre todo a reforzar la alianza entre élite local y poderes económicos extranjeros. Finalmente, el sector más favorecido por el proceso fue el del “sector más desarrollado de las empresas asociativas”, con un 58% de las superficies de palma africana, contra 19% en la producción de granos básicos (el resto dividido entre banano y caña) (Baumeister 1989, 69).

> El giro de la titulación y privatización de las tierras. Un modelo de desarrollo hacia la integración al mercado

A partir del *Proyecto de Titulación de Tierra para los Pequeños Productores* de 1982, se frena la dinámica de distribución de tierras: se opera un cambio en la política agraria que se concentra en la titulación, pensada como herramienta para realzar la seguridad sobre la propiedad de la tierra, facilitar el crédito y mejorar la productividad agrícola. Se considera que esta fase constituyó la piedra angular de la inserción de la clase campesina a las lógicas de desarrollo del mercado de tierras. Si bien las reformas agrarias llevadas a cabo desde los años 1960 y hasta la década de los 80's permitieron acercar los grupos campesinos (sin tierra) de los medios de producción (tierras, estructuras de producción y medios de transporte), sobre todo a través de la migración interna y de la colonización agrícola, fueron después separados a raíz de las políticas de privatización y liberalización emprendidas en los 90's (Baumeister 2001, 42; León Araya 2019).

El proceso se profundiza en el 1992, con la *Ley de Modernización Agrícola* -también conocida como Ley Norton (nombre del economista de la USAID). “La Ley de Modernización Agrícola, por primera vez, hizo de la rentabilidad una prioridad. Nuevos artículos reemplazaron las protecciones de las cooperativas proporcionadas por los artículos de la Ley de Reforma Agraria de 1972 y permitió que las tierras cooperativas volvieran a ser expropiadas por grandes empresas frutícolas” (Jung 2011, 55). Estas dos leyes (1982 y 1992) se inscriben en el contexto de la deuda contratada por el país -“la deuda como régimen disciplinario” según S. Sassen (2014) - y en la línea de la implementación de las políticas de ajustes estructurales en la región (paradigma del “willing buyer-willing seller” promovido por el Banco Mundial), ya que permitieron la venta y la compra de tierras que estaban antes apartadas de las lógicas del mercado, impulsando una mayor concentración a favor de las empresas extranjeras y nacionales, al mismo tiempo que provocaron el desmantelamiento y la venta de las cooperativas. Como resultado de este golpe final a la Reforma Agraria, basado en políticas de modernización de la tenencia de la tierra, liberada y privatizada para poder integrar plenamente lógicas de mercado, observamos las siguientes dinámicas:

- Se promovieron proyectos basados en la ideología de la necesidad de capitalizar la familia campesina en el contexto del retiro del Estado. En lugar de reducir la inseguridad en los derechos de propiedad, lo que se "modernizaron" fueron las herramientas que utilizaron para impugnar los derechos en la tierra; con ello aumentó el nivel de tensión y de luchas sociales (Jansen y Roquas 1998).
- Con la liberalización de las ventas de tierra, muchos pequeños y medianos productores vendieron sus tierras reformadas y pasaron a ser asalariados. Se combinaron dinámicas de despojo a través de

violencias, intimidaciones, coacción, amenazas por parte de los empresarios, sus brazos armados y sus aliados narco-políticos locales, con la rápida expansión de cultivos no tradicionales orientados a la agroexportación, como la palma africana.

- La importancia de las ventas de tierras del sector reformado no fue homogénea en todo el territorio nacional, con una proporción mucho más alta en la región de la costa Atlántica (ver mapa 1). La transferencia de tierras ocurrió efectivamente en las regiones más fértiles y estratégicas del país (disponibilidad de agua, recursos naturales, vías de comunicación), generando procesos intensos de reconcentración agraria.

- Se consolidó una élite agroindustrial local que logró aumentar su capacidad de control territorial en la región y fortalecer sus vínculos con el capital transnacional. Según Macías (2001, 94), el 57% de las tierras de las cooperativas de la Reforma Agraria quedaron en manos de Miguel Facussé Barjum y René Morales Carazo. Ejerciendo un control extenso sobre el sistema político nacional, influyeron en políticas internacionales de ajustes estructurales y ubicaron su capital en múltiples sectores, en particular en el agro, las energías y el turismo. Estos personajes se impusieron como relativamente nuevos rivales del poder histórico de las compañías norteamericanas. Varios autores abundan en que el golpe de Estado del 2009 resulta en gran parte de esta reconfiguración de las relaciones de poder en el país (Kerssen 2013; Moreno 2019; León Araya 2019).

La reconfiguración de los espacios a lo largo del siglo XX ha puesto a la luz nuevas delimitaciones, relaciones de poder, funciones productivas y desigualdades socio-territoriales. Observamos un giro en la integración de los márgenes territoriales, espacios fundamentales para la consolidación de las lógicas de globalización y centralidad del mercado. La expansión del cultivo de palma en Honduras arranca precisamente en este contexto, junto con la penetración de las nuevas políticas de integración económica y ajustes estructurales.

II. La expansión de la palma: lógicas contemporáneas del extractivismo en la franja litoral atlántica

La producción de aceite de palma crece a escala mundial, particularmente en África y en Asia del Sureste, relacionándose con tres mercados principales: el biodiésel, la agroindustria y la industria química-cosmética. Se trata de una planta no-nativa en América central, región cuya producción representa una pequeña proporción a nivel global pero que sin embargo ha aumentado notablemente en

los últimos años.² Este cultivo emergente constituyó una herramienta clave de la política del gobierno hondureño de desarrollo agrícola y expansión del sector reformado, particularmente en la zona fértil de la Costa Norte. En los 7 años posteriores a la cancelación de la Reforma Agraria del 1962 y al golpe contra Morales, la UFC incrementó su producción de palma de un 120%, llegando a 4000 hectáreas en el 1969 (Jung 2011, 62). La transnacional estableció relaciones estrechas con pequeños productores y cooperativas, así como con la élite empresarial local, en particular Miguel Facussé quien estableció en el 1957 lo que se convirtió después en una central de distribución de gran influencia regional: la Corporación Dinant.

En febrero del 1980, el gobierno hondureño creó COAPALMA (Cooperativa Agroindustrial de la Reforma Agraria de la Palma Africana) con una base de 50 cooperativas, que fungirá como un brazo político del gobierno y soportará la expansión de la industria de la palma a nivel nacional. Esta entidad, junto con Dinant y la UFC siguieron consolidando el control sobre el cultivo, el procesamiento del fruto, la comercialización y la exportación, demostrando una presencia siempre más fuerte, tanto económicamente como políticamente sobre los recursos agrarios y laborales de la frontera agrícola en los departamentos del norte del país. Por ende, se profundizó una lógica de integración vertical para mantener el control sobre todas las etapas, aprovechando de la capacidad de producción de las estructuras pequeñas y medianas.

Apoyándose en las legislaciones de privatización de las tierras del inicio de la década de los 1990, el grupo Dinant (y otras grandes corporaciones) logró controlar miles de hectáreas,³ jugando un papel clave en la mayoría de los conflictos agrarios relacionados con la expansión del cultivo de palma. En 1998, el huracán Mitch destruyó gran parte de las infraestructuras de producción y transporte. El FMI respondió con un gran plan de inversión y junto con el gobierno nacional, orientaron los recursos en reforzar infraestructuras para la exportación, privilegiando los grupos oligárquicos hondureños y los grupos transnacionales como ejecutores de los megaproyectos.⁴ Otro huracán, Beta, golpeó el país en

² Cabe subrayar que la introducción de la palma africana empezó a inicios del siglo 20 a raíz de la enfermedad de Panamá que obligó a la United Fruit Company a experimentar nuevas producciones para paliar la baja en la producción de banano. En el 1937, algunos productores ya hacían pruebas experimentales con variedades de palma originarias de Congo o Sierra Leona; en 1943, la United Fruit sembraba sus propias variedades, desarrollando un producto emergente muy prometedor dadas las nuevas demandas en fuel y alimentos en el contexto de la segunda Guerra Mundial. Sin embargo, es solamente a partir de los años 1960 que la capacidad de producción de la palma africana se consolidó realmente, gracias a mayores esfuerzos de investigación y tecnificación que permitieron la masificación de una producción en gran escala.

³ Como lo propone Jung (2011), el término de “control” permite interpretar mejor la situación de tensiones agrarias, enfocando más a las dinámicas de poder que a la propiedad formal de la tierra que se encuentra en disputa.

⁴ El presidente Carlos Flores Facussé (sobrino de Miguel) reformó el artículo 107 de la Constitución en diciembre del 1998, con el fin de abrir la posibilidad de compra de terrenos en el litoral al capital extranjero, argumentando que “las circunstancias coyunturales, los nuevos y modernos conceptos económicos, la globalización de la economía, la competitividad de los tratados de libre comercio [...] exigen disposiciones legales que hagan atractivo a nuestro país”.

2005, afectando también gravemente comunidades campesinas e indígenas, carreteras, plantaciones y viviendas. En ambos casos, las disputas por los recursos se han incrementado, entre ocupación de tierras, acaparamiento por parte de los grandes grupos empresariales y represión. Y en la misma sintonía, se impone un discurso de desarrollo que apuesta a la inversión capitalista para la generación de empleos, mientras los números de los migrantes que salen hacia el Norte empiezan a crecer.

En enero del 2006, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) de Honduras publicó en la Gaceta el “Acuerdo marco para la competitividad de la palma africana y otras palmeras” (República de Honduras 2006), donde plantea un diagnóstico de la situación del cultivo a nivel internacional y de los efectos de los huracanes en los medios de producción en el territorio nacional. Con la meta de desarrollar “un sector palmero productivo, competitivo e insertado en el mercado globalizado [en el marco de] una cadena agroalimentaria articulada” (p.4), se planea un apoyo técnico, logística y financiero al sector, así como el aumento de la producción de fruta fresca de palma africana, con la ampliación del área de producción de 28,000 hectáreas en los departamentos de Atlántida, Cortés, Colón y Yoro (además de instalar nuevas plantas extractoras)⁵.

En el mismo periodo, mediante la Política de Estado para el Sector Agroalimentario 2004-2021, la SAG implementó el Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO), con el fin de “desarrollar el sector agroalimentario mediante la integración de cadenas, el incremento de valor agregado y el desarrollo agroindustrial en un mercado global altamente competitivo”. Entre 32 de las cadenas agroalimentarias destacadas, la cadena de palma aceitera se considera como de las más estratégicas, puesta su potencial de crecimiento productivo e innovación tecnológica, su importancia en la generación de divisas (entre los 5 primeros rubros de exportación del país, principalmente hacia Nicaragua, El Salvador y México), y en la generación de empleos (135,000 empleos directos según la página oficial de la Secretaría)⁶. Se subraya en documentos técnicos que una de las fortalezas de este cultivo en el eslabón de producción reside en la “disponibilidad de tierra para incrementar el rubro”, confirmando la continuidad de un proyecto territorial que apuesta al avance de la frontera agrícola, a través de la expansión del monocultivo de la palma en la región del litoral Atlántico (ver mapa 2).

En el 2011, el Gain report, del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA Foreign Agricultural Service 2012), contabilizaba 135,000 hectáreas plantadas en palma en Honduras. Se considera en este documento que el cultivo permite “satisfacer la demanda de combustibles, el

5 Mientras un documento cartográfico en línea, sellado por la SAG y PRONAGRO en 2006, muestra un “área potencial óptima” de 440,323 hectáreas y un “área potencial marginal” de 96,758 hectáreas, además de los 89,100 hectáreas de “plantaciones actuales”. Desafortunadamente, resulta imposible comprobar estos datos y encontrar la fuente original en documentos oficiales.

6 <https://areas.sag.gob.hn/pronagro>

incremento de empleos y de ganancias en zonas rurales, la reducción de emisión de dióxido de carbono y de escape de divisas”. El mismo año, otros 70 millones de US\$ fueron inyectados por parte del IFC con el propósito de crear empleos y créditos para pequeños empresarios, casi la mitad captados por Dinant, en particular en la economía verde y energía limpia (represas para energía hidroeléctrica y palma para biodiesel)⁷, sectores que están denunciados como responsables de despojos violentos, asesinatos y criminalización de la protesta en diferentes puntos del país⁸. En las **gráficas 1 y 2**, se puede apreciar la evolución de las áreas cosechadas y del valor de las exportaciones para la palma africana (con comparación con el café y el banano), según datos de la FAO, entre finales de los años 1980 y la actualidad.

Más recientemente, otra vertiente de la política económica y de ordenamiento territorial ha demostrado el carácter estratégico de las lógicas de enclave y atracción del capital en zonas de frontera en Honduras. En la línea de las emergentes Zonas Especiales Económicas (ZEE), muy a menudo calificadas de nuevos enclaves contemporáneos del siglo XXI, por ser a la vez espacios “excepcionales” y “extraterritoriales” (Levien 2013; Ong 2007; Roux y Geglia 2019), las Regiones Especiales para el Desarrollo (RED) fueron aprobadas en Honduras en 2011, durante el mandato del presidente Porfirio Lobo, siguiendo las recomendaciones del economista norteamericano neoliberal Paul Romer, pensador de la adaptación de las ciudades autónomas (*charter cities*) en los países del Sur. El Congreso votó la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) en junio de 2013, con el propósito de fomentar una nueva división administrativa que goza de un alto nivel de autonomía más propenso a aprovechar las lógicas del libre mercado global, sobre todo gracias a una mayor atraktividad para el capital extranjero. El artículo 2 de esta ley⁹ estipula 12 tipos de Zonas, dentro de las cuales destacamos aquí las Zonas Agroindustriales Especiales (las otras, dedicadas a los sectores del turismo, energías renovables, logística internacional o minas, por citar algunas).¹⁰ Resalta la importancia de la zona de la costa Norte, por su conexión con el tejido urbano de las ZEDES en relación con los corredores de desarrollo transísmicos abiertos hacia el comercio exterior. En este modelo de desarrollo, las fronteras legales y los desequilibrios territoriales (y naturales) buscan ser

7 Ver <https://subversiones.org/archivos/123702> sobre las inversiones del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de grupos financieros nacionales o europeos y sobre los créditos de carbono otorgados bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto para el cambio climático.

8 Por ejemplo, con el proyecto Agua Zerca en la zona Lenca, con la empresa DESA involucrada en el asesinato de Berta Cáceres.

9 https://www.tsc.gob.hn/web/leyes/Ley_zonas_empleo_desarrollo_eco_2013.pdf

10 Se determinaron 14 “zonas potenciales” o 10 “zonas aptas para el desarrollo”, según los documentos que se encuentran en la página oficial de las ZEDES del Gobierno de Honduras y que indican por sí solos el bajo nivel de transparencia y rigurosidad de la información disponible:

https://web.archive.org/web/20140416102534/http://zede.gob.hn/?page_id=106

rentabilizados más que atenuados, a través de la explotación de los recursos, la expansión de la red de infraestructuras y la conexión con el mercado global.

III. La frontera social como línea de fractura: organización social de la producción, sistemas de dominación y exclusión en territorios rurales

Las fronteras sociales constituyen el último límite, borde o línea de desequilibrio en el que se apoyan los sistemas extractivistas. Consideramos en este tercer apartado la manera en la que los dispositivos productivos de agroexportación se sustentan en el control y la explotación de los recursos agrarios y laborales a escala micro, a través de mecanismos de dominación complejos y no-frontales, sobre todo en su relación con los pequeños y medianos productores.

Las ciencias sociales y los estudios rurales en particular han puesto en enfoque, en la década de los 70's, en un paradigma de una cierta articulación de las formas de producción, entre el “atraso” y el “moderno”, la subsistencia campesina y la empresa agrícola capitalizada, la mano de obra familiar y la mano de obra asalariada, lo que “presupone la permanente interacción entre ambos términos, creando condiciones de producción, reproducción y explotación” (Baumeister 1989, 55). Para Baumeister, esta perspectiva subestima la capacidad de inserción del capitalismo en las estructuras agrarias, y por lo tanto su poder de transformación sobre estas. En su opinión, esto se debe en parte a la atención que se ha dado al caso específico guatemalteco (con el modelo de la fuerza de trabajo campesina/indígena que vende su fuerza de trabajo temporalmente en las haciendas) y al poco estudio de las otras dinámicas en vigor en el resto de la región centroamericana. En los principales cultivos de enclave, el autor sostiene que la penetración del capitalismo en el medio rural toma formas complejas e incrementa los niveles de proletarización de la fuerza de trabajo en el campo: “la mano de obra [está] más cercana a una posición de asalariado agrícola, de residencia rural, fundamentalmente reproducido a través del salario, sin acceso directo a la tierra, y localizado en las áreas cercanas a los corazones de la agroexportación” (idem, 56).

> Lógicas extractivistas, sistema de control del recurso agrario y el papel de los pequeños y medianos productores

Desde la implementación de la Reforma Agraria, se forma en los 80's las grandes cooperativas de palma africana, que “surgen [...] bajo acuerdo con las grandes transnacionales que mantienen el control de la comercialización y la asistencia técnica, y transfieren parte de los riesgos productivos a las cooperativas formadas, en buena medida, por antiguos trabajadores de las plantaciones” (Baumeister

1989, 68). Además, a partir de las políticas de privatización de la tierra y dinámicas de ventas, y en el marco de un modelo calificado de coinversión y promovido desde los 1990's, se implementa una articulación siempre más estrecha entre los segmentos de beneficiarios de las Reformas Agrarias y las empresas privadas: los primeros aportan tierra y mano de obra mientras los segundos facilitan la financiarización, la tecnificación, el procesamiento y la comercialización (Baumeister 2001).

Edelman y León, quienes discuten los términos de acaparamiento y despojo -en función de la escala y de los actores en juego¹¹-, califican el proceso de “acaparamiento por control”, refiriéndose a mecanismos de dependencia en donde los pequeños productores asumen los riesgos, mientras los empresarios manejan el valor agregado en los mercados internacionales, aprovechándose por este medio de las mejores tierras y de la fuerza laboral, sin contrato formal de renta ni compra de tierras, y sin asumir costos de reproducción. La agricultura por contrato, como mecanismo que integra y subordina la pequeña y mediana producción agrícola, con orientación a la exportación, se ha desarrollado ampliamente en las 3 últimas décadas en los países del Sur. El contrato involucra generalmente tanto la tierra como la mano de obra, con el propósito de integrar las estructuras de producción y el campesinado local a los mercados nacionales y globales. En un contexto de falta de oportunidades para financiamiento, soporte técnico y acceso a los mercados así como de retiro del Estado y boom de las políticas neoliberales, múltiples estudios en América Latina han mostrado que los productores deciden muy a menudo participar en estas lógicas por estrategia de sobrevivencia y de mantenimiento en el campo, a pesar de los pocos beneficios que logran sacar y de los altos riesgos que ellos asumen (Echánove y Steffen 2005; Henderson 2017; Potter M. 2011).

Mientras los promotores de la agricultura por contrato hablan de una cooperación dinámica que permite la transferencia de tecnología, la modernización de la pequeña producción y la repartición de los beneficios entre los distintos actores libremente involucrados (Banco Mundial 2008), otro punto de vista califica el proceso de “instrumento de subordinación de una clase de pequeños propietarios todavía resilientes” (Clapp 1988, 6) al servicio de un modelo de desarrollo controlado por las corporaciones del agronegocio, en donde la integración vertical se conjuga con nuevas formas de dominación y de “incorporación adversa” (McCarthy 2010). Se desdibuja una “política del consentimiento” (León Araya 2019) en donde la ideología y la difusión del discurso capitalista hacia la modernización y el desarrollo pasa por la definición y el reforzamiento de las fronteras socio-productivas en las zonas rurales: desde el final de los años 80's, Clapp insistía en el papel clave de la

11 Argumentan que estos procesos no están claramente descritos para el caso centroamericano, en los informes o literatura que se han enfocado en el fenómeno a escala global y en grandes extensiones de tierra en África, Asia o América del Sur, por ejemplo.

ideología y de la mistificación de un acuerdo contractual entre dos partes iguales y libres, como una forma innovadora de organizar y asentar la agricultura capitalista. A partir del caso del banano en Honduras, mostró que el “problema campesino” se manejó desde representaciones políticas que definían como soluciones al incremento de la productividad y a la integración al mercado global, a partir de alianzas entre gobierno, empresas y productores. Esta perspectiva, argumenta, fomenta la idea del modelo del campesino de clase media, integrado y modernizado, cuyo éxito depende de su capacidad a entender las ventajas de la integración al sistema capitalista (Clapp 1988, 26), y acelera por la tanto la diferenciación y el establecimiento de divisiones entre los actores de la producción agrícola, dejando a un lado el campesino pobre que no supo tomar las vías de la modernidad.

En Honduras, el índice de concentración de la tierra es de 0.66, de acuerdo con datos recolectados en 2014 por la organización GRAIN (2014)¹², con solamente 8.6% de las tierras nacionales en manos del 70.6% de las explotaciones (de menos de 5 hectáreas) según la Encuesta Agrícola Nacional de 2007-2008. Para la producción de palma africana, vemos que las pequeñas explotaciones están muy marginales mientras el sector se apoya en productores medianos (casi la mitad de las superficies son explotadas entre 50 y 500 hectáreas) (ver gráficas 3 y 4).

Estos dependen de empresas y grupos agroindustriales, ya que no cuentan con los medios necesarios para el procesamiento, la comercialización y la exportación. Los estudios empíricos sobre estos mecanismos en el campo hondureño (León Araya 2019; Jung 2011), así como distintos trabajos en Guatemala (Hurtado 2008), Chiapas (Castellanos Navarrete 2018; Castellanos-Navarrete, Tobar-Tomás, y López-Monzón 2019) o Indonesia (McCarthy 2010) por ejemplo nos permiten apuntar en dos lógicas fundamentales desde el punto de vista de las fronteras socio-productivas, en las que se apoya la agricultura extractivista. Por un lado, el consenso y la incorporación adversa a escala local, con razones económicas, pero también culturales, simbólicas (Edelman y León Araya 2014, 216) y sociopolíticas (Castellanos Navarrete 2018) que condicionan la participación de los productores en las cadenas productivas de la palma. Es importante subrayar la renovación o actualización de las prácticas de despojo en el modelo agroindustrial, con “un modelo [capitalista] cuya función no es excluir, prohibir, marginar y reprimir, sino por el contrario: incluir, incorporar, intervenir y transformar individualidades de acuerdo con su propio proyecto [...]” (Giraldo 2018, 85). Desde esta perspectiva, la “acumulación por desposesión” (Harvey 2005) reviste formas sutiles y complejas de despojo, con un carácter no menos violento dadas las condiciones globales de dominación, los desequilibrios económicos en presencia y la hegemonía del discurso sobre los caminos correctos hacia el desarrollo. De acuerdo con

12 Sirva como comparación los índice Gini de concentración de tierra para los otros países de la región: El Salvador 0.58; Guatemala 0.84; Nicaragua 0.86; México 0.63.

D. Ojeda (2016), los “paisajes del despojo” se materializan en la vida cotidiana, vulneran la capacidad de reproducción de la vida -natural y social- y producen una violencia silenciosa basada en la acentuación de las desigualdades. Por otro lado, se revela útil para este análisis considerar que la acción del capital transforma las relaciones de producción en el marco de la agroexportación global, en zonas de frontera tanto territoriales como socio-productivas. Dicho de otro modo, los dispositivos de apropiación de los recursos como la agricultura por contrato o el arrendamiento de tierras tienden a fortalecer la diferenciación entre los actores de la producción, al mismo tiempo que se aprovechan de ella para sostener la generación de plusvalía. Las experiencias de expansión de los cultivos de palma para el biodiesel en el mundo han demostrado el impacto de la inyección de capitales del agronegocio en las fronteras agrícolas en la transformación del medio rural, lo que genera profundos cambios agrarios y sociales a nivel local (McCarthy 2010; Castellanos Navarrete 2018). Además, esta reinención de los mecanismos de organización de la producción extractiva y globalizada se basan en la competitividad entre actores y en la distinción entre múltiples formas de empresariado agrícola: en la “agricultura de firmas”, “la relegación –rechazo en los márgenes del territorio- atestigua de situaciones de precarización, subyugación y no-derecho, hasta de neo-servitud. Contribuye al reforzamiento de una agricultura de subsistencia que se parece a la sobrevivencia” (Purseigle y Chouquer 2013, 7*¹³).

>Agricultura, desarrollo y migración. Viejos debates y la realidad de la exclusión

En su apartado “¿Qué herramientas son eficaces a la hora de utilizar la agricultura para el desarrollo?”, el Banco Mundial contesta que uno de los elementos fundamentales es la gestión del recurso tierra. Plantea lo siguiente: “Los mercados de tierras, especialmente de arrendamiento, pueden elevar la productividad, ayudar a las familias a diversificar sus ingresos y facilitar el pasaje a sectores no agrícolas. [...] es necesario contar con mercados de tierras eficientes con el fin de transferir las propiedades a los usuarios más productivos y facilitar la participación en el sector rural no agrícola y la migración a otros sectores” (Banco Mundial 2008, 7). T. Li (2009) contrasta esta visión idílica de las trayectorias de salida y retorno a la vida rural/campesina, insistiendo en que los más pobres se ven excluidos de la actividad agrícola en condiciones siempre desventajosas. Insiste sobre todo en las lógicas de competitividad y acentuación de las desigualdades expuestas anteriormente: “aquellos que simplemente no pueden competir deben salir, encontrar otro lugar para ir y algo más que hacer” (idem, 630*). La autora rechaza también la tesis de un impacto positivo de la agricultura globalmente integrada en términos de reducción de la pobreza: analiza el fenómeno del acaparamiento de tierras

¹³ * Traducción de la autora

desde el punto de vista -original- del trabajo, planteando la exclusión y la expulsión de grandes categorías de población que el sistema capitalista no necesita. Mientras los organismos internacionales promotores de desarrollo presentan la integración al sistema de mercado y a las cadenas de valor agroindustriales como elementos que permitan la reducción de la pobreza rural -a través de la generación de empleos asalariados, de las oportunidades de producción por contrato y de la posibilidad de generar ingresos vía la renta o la venta de la tierra-, Li parte del ejemplo de la palma indonesia para evidenciar una realidad distinta: la prometida transición de la agricultura hacia la industria no ha ocurrido y las poblaciones rurales -en particular jóvenes y siempre más educadas- siguen marginadas y excluidas, tanto en sus lugares rurales de origen como en las ciudades o en contextos de migración (Li 2011).

Como límite interno a la sociedad, “la figura de la frontera social [supone] juegos ambivalentes entre relaciones y separaciones, fracturas y transiciones, el afuera y el adentro” (Groupe Frontière 2004, 5*). Toma la forma de múltiples líneas de fractura -económicas, culturales, sociales o étnicas- sobre las cuales el sistema de dominación y explotación se apoya para consolidarse, crecer y mantenerse. En este sentido, resulta imprescindible incorporar a la reflexión sobre las fronteras del extractivismo una dimensión social desde la realidad de la exclusión, ya que las desigualdades territoriales abarcan tanto a los recursos productivos y agrarios como a la fuerza de trabajo. Hoy en día, los colosales impactos de la inserción del capital global en la agricultura obligan a replantear la cuestión campesina y más generalmente el futuro de los territorios rurales, no solamente en términos de acceso a la tierra y a los medios de producción, sino también en clave de explotación laboral, urbanización, migración y hambre (Araghi 2000; Lewontin 2000). El caso hondureño no es excepción, en un territorio marcado por múltiples y aunadas formas de opresión (Bourgeois 1988) cuyo origen está históricamente relacionado con la explotación agrícola orientada hacia el exterior, pero que también se extiende y se refleja en distintas vertientes de una geografía de la dominación que empuja las poblaciones rurales fuera de sus lugares de origen en contextos de alta vulnerabilidad (Reichman 2011; Pine 2008; Iborra Mallent 2019; León Araya y Salazar 2016). El sector maquilero de la industria textil global, la migración internacional, la desarticulación familiar y la violencia de las pandillas no cesan de mostrar la estrecha combinación de diversas construcciones de fronteras y formas de violencia estructural en este país centroamericano.

Conclusiones

La construcción histórica de los territorios al margen como frentes pioneros a través de la colonización extractivista evidencia el rol de las rupturas territoriales en la implantación y el desarrollo de lógicas de enclave en donde la rentabilidad reside en el beneficio de la desigualdad, en términos de recursos tanto naturales como humanos. Las zonas de frontera, o de margen, se convierten por lo tanto en espacios privilegiados para la colocación del capital y los diferenciales territoriales en ventajas comparativas para la economía globalizada. Además de las asimetrías territoriales, hemos visto que la lógica extractivista sabe sacar provecho de las fronteras sociales en el campo, a través de mecanismos de explotación, dominación y control sobre los recursos de las organizaciones productivas medianas, sin permitir el acceso a condiciones dignas de inserción a los mercados comerciales y laborales.

Las estrategias capitalistas del siglo 20 se construyen fundamentalmente en el aprovechamiento de efectos frontera o, dicho de otro modo, de la presencia de desigualdades diversas entre los territorios productivos del globo. En la tercera parte de su obra maestra *“La acumulación del capital”*, Rosa Luxemburgo examina las condiciones históricas de la acumulación, apuntando los límites del análisis de Marx, ya que presenta “el proceso de acumulación del capital total en una sociedad compuesta únicamente de capitalistas y obreros” (Luxemburgo 2018, 158). Por el contrario, ella afirma que la reproducción ampliada no es viable en una economía capitalista cerrada: requiere de un entorno social no-capitalista para proporcionarle recursos naturales y mano de obra. Si bien la lectura de Luxemburgo no se caracteriza por una atención particular a la dimensión espacial del proceso de acumulación capitalista, resulta muy relevante retomar su propuesta en clave territorial para considerar las dinámicas de construcción histórica de las fronteras globales que han acompañado el desarrollo del extractivismo agrícola. Los espacios centrales del capitalismo necesitan explotar e invadir territorios más o menos cercanos en donde van a “lucha[r] contra la economía natural” así como “contra la economía campesina” para apropiarse de fuerzas productivas (tierra, materias primas y trabajo). Además, el capital se va a sostener en estos desequilibrios imponiendo economías de intercambio, convirtiendo la naturaleza en mercancía, extendiendo “la acción del capitalismo a las sociedades de economía natural” (idem, 189) y separando “la industria de la agricultura [a través de] la eliminación de las industrias rurales dentro de la economía campesina” (idem, 194).

A lo largo del siglo 20, la relación entre agricultura y capitalismo no se ha debilitado. La división internacional del trabajo ha constituido el marco a partir del cual se definió el rol de cada país, región o territorio, en términos de centros y periferias y de producción urbano-industrial o agrícola-residual. La construcción del paradigma del desarrollo está históricamente vinculada con este

movimiento de hegemonía global que se apoya en la integración y el abastecimiento de productos no-tradicionales (café, banano, azúcar, etc.) e insumos para la alimentación altamente procesada o biodiesel, a nivel internacional. “Desde el agro-colonialismo hasta el agro-industrialismo” (McMichael 2000, 127), se acentuaron las relaciones de dependencia en el marco de dispositivos de poder que llevan a un desarrollo desigual, vía la producción social y política de la naturaleza (Smith 2020). Esta dinámica indudablemente provoca inmensas asimetrías a escala regional y global, pero -y eso constituye el argumento principal aquí- se construye fundamentalmente en ellas, jugándose de las ventajas comparativas, a partir de fragmentaciones y desequilibrios esenciales para el establecimiento de tal división internacional del trabajo y de la producción agrícola.

Finalmente, para pensar las fronteras migratorias en la región mesoamericana, resulta indispensable prestar atención a las fronteras territoriales en sus diversas escalas y a las fronteras sociales. El Plan Puebla-Panamá, proyecto de corredor de desarrollo impulsado desde el 2001 (hoy Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica), así como el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, firmado entre 2003 y 2007, impactan por el nivel de brechas de desarrollo dentro de estos acuerdos de integración regional. Atrás del proyecto político de integración subordinada (Frambes-Buxeda 1994), se generan altos niveles de dependencia alimentaria (exportación de productos agrícolas -frutas y verduras frescas principalmente- e importación de cereales y alimentos industriales altamente procesados), y se profundizan el empobrecimiento y la marginalización de las economías campesinas. Mientras la “nueva agricultura para el desarrollo” promueve la integración, la diferenciación y la especialización, es necesario profundizar otras miradas sobre el “régimen de la alimentación global” (McMichael 2005), las condiciones de explotación, marginación y fragilización de los pequeños productores en un contexto de competitividad neoliberal y fragmentación socio-territorial de la producción de alimentos, que pasa por la “brutalidad” del “nuevo mercado global de la tierra” (Sassen 2014).

En 2015, a través del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte que se impulsó en reacción a la huida de más de 40.000 niños no acompañados originarios de la región el año anterior, el Congreso de los Estados Unidos asignó \$ 750 millones de dólares para los tres países, destinados a atraer la inversión privada, modernizar las infraestructuras a gran escala y promover sectores estratégicos como el textil, el turismo y la agroindustria. Paralelamente, se incrementó fuertemente la ayuda militar y policial a regímenes autoritarios, agravando el nivel de una violencia claramente multidimensional. Un mes antes de la crisis sanitaria por el Covid19, más de un 40% de la población

hondureña declaraba pensar o desear emigrar, de acuerdo con un sondeo¹⁴, demostrando de nuevo que los dispositivos de integración económica regional van de la mano con un poderoso reforzamiento de las múltiples fronteras atravesadas por la población centroamericana, candidata a la migración.

Bibliografía

- Acosta, Alberto. 2013. «Extractivism and neoextractivism: two sides of the same curse». En *Beyond Development: Alternative Visions from Latin America*, editado por Miriam Lang y Dunia Mokrani, 61-87. Amsterdam: Transnational Institute-Fundación Rosa Luxemburgo.
- Araghi, Farshad. 2000. «The great global enclosure of our times: peasants and the agrarian question at the end of the twentieth century». En *Hungry for Profit: The Agribusiness Threat to Farmers, Food, and the Environment*, editado por Magdoff Fred, Buttel Frederick H. y Foster Bellamy John, 145-160. New York: Monthly Review Press.
- Banco Mundial. 2008. «Informe sobre el Desarrollo Mundial 2008: Agricultura para el desarrollo». Banco Mundial, Mundi-Prensa y Mayol Ediciones.
- Baumeister, Eduardo. 1989. «Tendencia de la agricultura centroamericana en los años ochenta». En *Centroamérica: los desafíos, los intereses, las realidades*, editado por Eduardo Gitli, 37-99. México: UAM-Azcapotzalco, Gernika.
- . 2001. «Las reformas agrarias en Centroamérica: un balance de sus resultados al finalizar los años 90». En *Nueva ruralidad y política agraria: una alternativa neoinstitucional para Centroamérica*, editado por Harry Clemens et Raúl Rubén, 67-86. Caracas: Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, Vrije Universiteit te Amsterdam.
- Borras, Saturnino M., Jennifer C. Franco, Sergio Gómez, Cristóbal Kay, y Max Spoor. 2012. «Land grabbing in Latin America and the Caribbean». *The Journal of Peasant Studies* 39 (3-4): 845-872. <https://doi.org/10.1080/03066150.2012.679931>.
- Borras, Saturnino M., Cristóbal Kay, Sergio Gómez, y John Wilkinson. 2012. «Land grabbing and global capitalist accumulation: key features in Latin America». *Canadian Journal of Development Studies / Revue canadienne d'études du développement* 33 (4): 402-416. <https://doi.org/10.1080/02255189.2012.745394>.
- Bourgois, Philippe. 1988. «Conjugated Oppression: Class and Ethnicity among Guaymi and Kuna Banana Workers». *American Ethnologist* 15 (2): 328-348. <https://doi.org/10.1525/ae.1988.15.2.02a00080>.
- Bourgois, Philippe, y Corinne Hewlett. 2012. «Théoriser la violence en Amérique. Retour sur trente ans d'ethnographie». *L'Homme. Revue française d'anthropologie*, 203-204: 139-168. <https://doi.org/10.4000/lhomme.23121>.

14 Sondeo de Opinión Pública presentado por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de la Orden Jesuita: <https://www.proceso.hn/portadas/10-portada/un-40-2-de-hondurenos-piensa-emigrar-a-raiz-de-actual-situacion-de-pais.html>

- Castellanos Navarrete, Antonio. 2018. «Palma de aceite en tierras campesinas: la política de las transformaciones territoriales en Chiapas, México». *Revista pueblos y fronteras digital* 13: 1-34. <https://doi.org/10.22201/cimsur.18704115e.2018.v13.357>.
- Castellanos-Navarrete, Antonio, William V. Tobar-Tomás, y Carlos E. López-Monzón. 2019. «Development without Change: Oil Palm Labour Regimes, Development Narratives, and Disputed Moral Economies in Mesoamerica». *Journal of Rural Studies* 71: 169-180. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2018.08.011>.
- Chonchol, Jacques. 1994. «*Sistemas agrarios en América Latina: de la etapa prehispánica a la modernización conservadora*». Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica.
- Clapp, Roger A.J. 1988. «Representing Reciprocity, Reproducing Domination: Ideology and the Labour Process in Latin American Contract Farming». *The Journal of Peasant Studies* 16: 5-39. <https://doi.org/10.1080/03066158808438381>.
- Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH). n.d. «Reforma Agraria, Agricultura y medio Rural en Honduras. La agenda Pendiente del Sector Campesino».
- Demyk, Noëlle. 2007. «Café et pouvoir en Amérique centrale». *Etudes rurales*, 180: 137-154.
- Devia Garzón, Camilo Andrés, Dina Alejandra Ortega Avellaneda, y Jairo José Niño Pérez. 2016. «Violencia Estructural En El Triángulo Norte Centroamericano». *Logos, Ciencia y Tecnología* 7 (2): 105-114.
- Echánove, Flavia, y Cristina Steffen. 2005. «Agribusiness and Farmers in Mexico: The Importance of Contractual Relations». *The Geographical Journal* 171 (2): 166-176.
- Edelman, Marc, y Andrés León Araya. 2014. «Ciclos de Acaparamiento de Tierras En Centroamérica: Un Argumento a Favor de Historizar y Un Estudio de Caso Sobre El Bajo Aguán, Honduras». *Anuario de Estudios Centroamericanos* 40: 195-228.
- Euraque, Darío A. 1996. *Reinterpreting the Banana Republic: Region and State in Honduras, 1870-1972*. Chapel Hill & London: University of North Carolina Press.
- Fontenay, Catherine C. de. 2004. «The Dual Role of Market Power in the Big Push: From Evidence to Theory». *Journal of Development Economics* 75 (1): 221-238. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2003.09.003>.
- Frambes-Buxeda, Aline. 1994. «La integración subordinada en América Latina». *Nueva sociedad* 133: 1521-63.
- Gadea, Elena, Antonio J. Ramírez Melgarejo, y Joaquín Sánchez. 2014. «Estrategias de reproducción social y circulaciones migratorias de los trabajadores en los enclaves globales». En *De cadenas, migrantes y jornaleros: los territorios rurales en las cadenas globales agroalimentarias*, editado por Andrés Pedreño Cánovas, 134-171. Madrid: Talasa.
- Galtung, Johan. 1969. «Violence, Peace, and Peace Research». *Journal of Peace Research* 6 (3): 167-191. <https://doi.org/10.1177/002234336900600301>.
- Giraldo, Omar Felipe. 2018. *Ecología política de la agricultura: agroecología y posdesarrollo*. San Cristóbal de Las Casas: ECOSUR.
- Gitli, Eduardo. 1989. «El proyecto de Estados Unidos en Centroamérica». En *Centroamérica: los desafíos, los intereses, las realidades*, editado por Eduardo Gitli, 99-121. México: Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, Gernika.
- GRAIN. 2014. *Hambrientos de tierra. Los pueblos indígenas y campesinos alimentan al mundo con menos de un cuarto de la tierra agrícola mundial*. Informe de GRAIN.

- Groupe Frontière. 2004. «La Frontière, Un Objet Spatial En Mutation.» *EspacesTemps.Net Electronic Journal of Humanities and Social Sciences.*, en línea : <https://www.espacestemp.net/articles/la-frontiere-un-objet-spatial-en-mutation/>
- Gudynas, Eduardo. 2009. «Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual». En *Extractivismo, política y sociedad, editado por CAAp & CLAES*, 187-225. Cuadernos de capacitación. Quito: Centro Andino de Acción Popular & Centro Latinoamericano de Ecología Social.
- . 2010. «Agropecuaria y nuevo extractivismo bajo los gobiernos progresistas de América del Sur». *Territorios* 5: 37-54.
- Harvey, David. 2005. *The New Imperialism*. Oxford: OUP.
- Henderson, Thomas Paul. 2017. «La reestructuración de los sectores del café y el cacao en México y Ecuador. Control agroempresarial de la tierra y trabajo campesino». *LiminaR* 15 (1): 128-141. <https://doi.org/10.2536/liminar.v15i1.499>.
- Hurtado, Laura. 2008. *Plantaciones para agrocombustibles y la pérdida de tierras para la producción de alimentos en Guatemala*. Informe de Actionaid.
- Iborra Mallent, Juan Vicente. 2019. «Eibuga Hama Wanunagu Garinagu (Caminando con los ancestros garífunas). Cosmopolíticas frente al despojo territorial en tiempos de la tercera expulsión». Tesis de Maestría en Estudios Latinoamericanos, CDMX: UNAM.
- Jansen, Kees, y Esther Roquas. 1998. «Modernizing Insecurity: The Land Titling Project in Honduras». *Development and Change* 29 (1): 81-106.
- Jung, Laura. 2011. «African palm and Afro-indigenous resistance: Race and dispossession of Garifuna lands on Honduras' northern coast». Tesis de Maestría en Artes y Ciencias sociales, Chicago: DePaul University.
- Kerssen, Tanya M. 2013. «*Grabbing Power: The New Struggles for Land, Food and Democracy in Northern Honduras*». New York: Food First Books.
- Lara Flores, Sara, Kim Sánchez, y Adriana Saldaña. 2014. «Asentamientos de trabajadores migrantes en torno a enclaves de agricultura intensiva en México: nuevas formas de apropiación de espacios en disputa». En *De cadenas, migrantes y jornaleros. Los territorios rurales en las cadenas globales agroalimentarias, editado por Andrés Pedreño Cánovas*, 150-170. Madrid: Talasa.
- Lefebvre, Henri. 1974. «La production de l'espace». *L'Homme et la société* 31 (1): 15-32.
- León Araya, Andrés. 2019. «The Politics of Dispossession in the Honduran Palm Oil Industry: A Case Study of the Bajo Aguán». *Journal of Rural Studies* 71: 134-143. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.01.015>.
- León Araya, Andrés, y Sergio Salazar. 2016. «Del cerro al Norte: Historia y memoria en la migración campesina hondureña». En *Migraciones en América Central: Políticas, territorios y actores*, editado por Carlos Sandoval García, 3-23. San José: UCR.
- Levien, Michael. 2013. «Regimes of dispossession: From steel towns to special economic zones». *Development and change* 44 (2): 381–407.
- Lewontin, R.C. 2000. «The maturing of capitalist agriculture: farmer as proletarian». En *Magdoff, F., Ballamy Foster, J. & Buttell F.H.: Hungry for profit: the agribusiness threat to farmers, food, and the environment*, 93-103. New York: Monthly Review Press.

- Li, Tania Murray. 2009. «Exit from agriculture: a step forward or a step backward for the rural poor?» *The Journal of Peasant Studies* 36 (3): 629-636. <https://doi.org/10.1080/03066150903142998>.
- . 2011. «Centering labor in the land grab debate». *The Journal of Peasant Studies* 38 (2): 281-298. <https://doi.org/10.1080/03066150.2011.559009>.
- Luxemburgo, Rosa. 2018. *La acumulación del capital*. En línea: Edicions internacionals Sedov.
- Macías, Miguel Alonzo. 2001. *La capital de la contrarreforma agraria: el Bajo-Aguán de Honduras*. Tegucigalpa: Editorial Guaymuras.
- McCarthy, John F. 2010. «Processes of inclusion and adverse incorporation: oil palm and agrarian change in Sumatra, Indonesia». *The Journal of Peasant Studies* 37 (4): 821-850. <https://doi.org/10.1080/03066150.2010.512460>.
- McMichael, Philip. 2000. «Global food politics». En *Hungry for Profit: The Agribusiness Threat to Farmers, Food, and the Environment*, editado por Magdoff Fred, Buttel Frederick H. y Foster Bellamy John, 125-143. New York: Monthly Review Press.
- . 2005. «Global development and the corporate food regime». En *New directions in the sociology of global development*, editado por Frederick H. Buttel y Philip McMichael, 265-299. Bingley : Emerald Group Publishing Limited.
- . 2009. «Banking on Agriculture: A Review of the World Development Report 2008». *Journal of agrarian change* 9 (2): 235-246. <https://doi.org/10.1111/j.1471-0366.2009.00203.x>.
- Moraes, Natalia, Elena Gadea, Andrés Pedreño, y Carlos De Castro. 2012. «Enclaves globales agrícolas y migraciones de trabajo: convergencias globales y regulaciones transnacionales». *Política y Sociedad* 49 (1): 13-34.
- Moreno, Ismael. 2019. «“Yo, Juan Orlando Hernández...”: Diez años de golpe de Estado». *Envío Honduras* 58: 1-11.
- Ojeda, Diana. 2016. «Los paisajes del despojo: propuestas para un análisis desde las reconfiguraciones socioespaciales». *Revista Colombiana de Antropología* 52 (2): 19-43.
- Ong, Aihwa. 2007. «Neoliberalism as a mobile technology». *Transactions of the Institute of British Geographers* 32 (1): 3-8.
- Pérez Brignoli, Héctor, y Mario Samper. 1994. *Tierra, café y sociedad: ensayos sobre la historia agraria centroamericana*. San José: FLACSO.
- Pine, Adrienne. 2008. *Working Hard, Drinking Hard. On Violence and Survival in Honduras*. Berkeley : University of California Press.
- Potter M., Lesley. 2011. «La industria del aceite de palma en Ecuador: ¿un buen negocio para los pequeños agricultores?» *Eutopía, Revista de Desarrollo Económico Territorial* 2: 39-54.
- Purseigle, François, y Gérard Chouquer. 2013. «Les territoires saisis par la firme». *Etudes rurales*, 191: 9-18.
- Reichman, Daniel R. 2011. *The broken village: coffee, migration, and globalization in Honduras*. Ithaca & Londres: Wiley-Blackwell.
- República de Honduras. 2006. «Acuerdo No 89/06 - Aprueba el Acuerdo Marco para la competitividad de la palma africana y otras palmáceas.» La Gaceta No 30.951.
- Roseberry, William. 1993. «Beyond the Agrarian Question in Latin America». En *Confronting Historical Paradigms: Peasants, Labor, and the Capitalist World System in Africa and Latin America*, editado por Frederick Cooper, Allen F. Isaacman, y Florencia E. Mal, 318-370. Madison: University of Wisconsin Press.

- Roux, Hélène, y Beth Geglia. 2019. «¿Excepción o continuismo? Nuevos enclaves: poder e infraestructura en Honduras». *Iztapalapa. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades* 40 (87): 17-43.
- Ruhl, J. Mark. 1984. «Agrarian Structure and Political Stability in Honduras». *Journal of Interamerican Studies and World Affairs* 26 (1): 33-68. <https://doi.org/10.2307/165506>.
- Sassen, Saskia. 2014. *Expulsions. Brutality and Complexity in the Global Economy*. Cambridge, London: Harvard University Press.
- Smith, Neil. 2020. *Desarrollo desigual. Naturaleza, capital y la producción del espacio*. Madrid: Traficantes de sueño.
- Soluri, John. 2009. *Banana Cultures: Agriculture, Consumption, and Environmental Change in Honduras and the United States*. Austin: University of Texas Press.
- USDA Foreign Agricultural Service. 2012. «Honduras Biofuel Annuals Report - Global Agricultural Information Network (GAIN)».